



## Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

**Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)**

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/>

**Usted es libre de:**



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

### Bajo las condiciones siguientes:



**Atribución** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



**No Comercial** — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



**Sin Obras Derivadas** — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

# **Ley 1448 del 2011: vulneración del principio constitucional a la igualdad en el reconocimiento de excombatientes como víctimas de delitos sexuales en el marco el conflicto armado colombiano\***

<sup>1</sup>Nicoll Andrea Romero Poveda\*\*

Universidad Católica de Colombia

## **Resumen**

A través del tiempo el Estado Colombiano en atención a las diferentes acciones lesivas de los Grupos Organizados al Margen de la Ley en contra de la población civil y la institucionalidad, ha participado en diferentes procesos de negociación tendientes a terminar el conflicto armado no internacional e iniciar un proceso de construcción de paz que ha requerido que no solo la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil de los miembros activos en las filas sean parte de las agendas de negociación. Es así como las víctimas, resultan una de las partes de mayor relevancia en las acciones que adelanta el Estado Colombiano a fin de cesar el estado de guerra interna, y reestablecer los derechos de quienes fueron afectados directa o indirectamente en el marco del Conflicto Armado.

No obstante, lo indicado, en una lectura acuciosa de la ley 1448 del 2011 se evidencia un sesgo normativo respecto de quienes ostentan la calidad de víctima, pues en el parágrafo 2 del artículo 3, se advierte que las personas que participaron en las hostilidades y que a su vez son víctimas, no son reconocidas como tales por participar directamente en el conflicto armado, limitando con ello el acceso a la oferta institucional provista por el Estado, para quienes ostentan dicha condición.

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente plantear la pregunta ¿El concepto de victima señalado en el artículo 3 de la ley 1448 vulnera el derecho constitucional a la igualdad para el reconocimiento de las víctimas de delitos sexuales intrafilas ocurridos en el marco del conflicto armado no internacional en Colombia?

---

\*Artículo de investigación presentado como requisito para optar al título de Abogada de la Universidad Católica de Colombia, bajo la asesoría de la Doctora Natalia Chacón Triana, docente de la Facultad de Derecho.

\*\*Estudiante en proceso de grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Identificada con código estudiantil 2112677 y correo electrónico: naromero77@ucatolica.edu.co.

**Palabras clave:** conflicto armado no internacional, delitos sexuales, víctima, victimario, reparación administrativa, Colombia, Constitución política, igualdad.

**Law 1448 of 2011: Violation of the constitutional principle of equality in the recognition of ex-combatants as victims of sexual offences within the framework of the Colombian armed conflict**

**Abstract**

However, over time the Colombian State in view of the different harmful actions of the Groups Organized outside the Law against the civilian population and institutionality , has participated in various negotiating processes aimed at ending the non-international armed conflict and initiating a peace-building process that has required that not only the leaving of arms and the return to civilian life of active members in the ranks be part of the negotiating agendas. This is how the victims are one of the most important parties in the actions taken by the Colombian State in order to cease the state of internal warfare, and to restore the rights of those who were directly or indirectly affected in the context of the Armed Conflict.

However, a pressing reading of the above-mentioned rule shows a normative bias for those who hold the quality of a victim, since paragraph 2 of Article 3 warns that persons who participated in hostilities, who in turn are victims, are not recognized as such for participating directly in the armed conflict, thereby limiting access to the institutional offer provided by the State, for those who hold that status.

In the face of the above, it is relevant to ask the question is the concept of victim identified in Article 3 of Law 1448 infringing the constitutional right to equality for the recognition of victims of intraphile sexual offences in the context of the non-international armed conflict in Colombia.

**Keywords:** Non-international armed conflict, sexual offences, victim, victim, administrative reparation, Colombia, political constitution, equality.

## **Sumario**

Introducción 1. Víctimas del conflicto armado no internacional en Colombia 1.1 definición de victima 1.2 marco normativo de la calidad de victima en el marco del conflicto armado 1.3 marco normativo internacional relacionado con la protección de la mujer en el marco del conflicto armado 2. Violencia sexual contexto general 3. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humano 3.1 Rosendo Cantú V/S México 3.2 Mujeres torturadas sexualmente V/S México 3.3 González y otras V/S México 3.4 Masacre de pueblo bello V/S Colombia 3.5 J. V/S Perú 4 Delitos de violencia sexual intrafilas en Colombia 4.1 Reconocimiento de víctima de delitos de violencia sexual intrafilas dentro de la ley 1448 de 2011. 4.2 Derecho a la igualdad en el marco de la ley 1448 del 2011 4.3 Decisión de la Corte Constitucional que amplía la implementación de la ley 1448 de 2011 5. Conclusiones. Referencias.

## **Introducción**

En el marco de las hostilidades la utilización de armas velicas y demás instrumentos que alteren el orden público implican la consumación de hechos que atentan contra la vida y la integridad de las personas, resulta una de las aristas que reviste el conflicto armado interno. Tal y como se identificará en el desarrollo del presente documento, la violencia sexual ha resultado establecerse como una herramienta más de sometimiento y control cuyo destinatario en especial son las mujeres, y cuya materialización no solamente ocurre con la población civil, sino que se consuma dentro de los propios grupos organizados al margen de la ley.

Es así como diferentes instrumentos nacionales e internacionales, y precedentes jurisprudenciales de tribunales internacionales, han permitido visibilizar a la violencia sexual como un escenario más de violencia el cual se ha configurado como un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra, estableciendo la necesidad de precisar qué tipo de conductas se asocian a estas victimizaciones, establecer responsables y por ende sancionar este tipo de conductas, que resultan reprochables dentro del conflicto armado, tanto internacional como no internacional.

Colombia al ser un Estado social de derecho tiene el deber constitucional y legal de garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las victimas

indirectas, víctimas directas y victimarios; es así como a partir de la Ley 387 de 1997 se empezó a evidenciar la necesidad de adelantar procesos de reparación administrativa respecto de las personas que con ocasión al conflicto armado no internacional Colombiano han visto vulnerados sus derechos. Es así como actualmente se cuenta con la Ley 1448 de 2011, norma que después de un desarrollo normativo a través de escenarios de cese bilateral del fuego armado y procesos de desmovilización de grupos organizados al margen de la ley ha establecido los presupuestos legales para que quienes se consideren víctimas del conflicto armado interno con ocasión a los hechos acaecidos con posterioridad al 01 de enero de 1985 accedan a una oferta institucional amplia que permita un restablecimiento de derechos, una reparación integral y un escenario de no revictimización.

No obstante lo anterior, la norma en cita desconoce la existencia de un escenario que comporta una doble condición que pudieren ostentar algunos miembros de los grupos armados, limitando el acceso a las ofertas institucionales cuando con ocasión a su participación directa en la hostilidades pese a que también se consumó una victimización por parte de terceros en el marco del conflicto armado no internacional, su ruta de atención institucional obedece a un proceso de reincorporación en calidad de desmovilizado y no a su condición de víctima.

El presente artículo pretende entonces evidenciar y exponer la desigualdad inconstitucional que se establece en el artículo 3 de la ley 1448 del 2011 y la limitación del universo de lo que se considerada jurídicamente como víctima pues dicho concepto ha evolucionado y en materia de delitos sexuales la norma en mención desconoce flagrantemente la ocurrencia de los hechos y la condición de víctima de quienes participaron directamente en el conflicto armado no internacional impidiendo su inclusión en el registro único de víctimas; pues si bien es cierto el registro único de víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas no acredita la calidad de víctimas, si abre la puerta para una oferta institucional que al igual que la Agencia para la Reincorporación y Normalización reduce las condiciones y situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las víctimas por ser ex combatientes pues tal como lo indica Delgado (2015) “esta delimitación del universo de víctimas no las reconoce en su totalidad y produce una desclasificación generando una vulneración al derecho de reparación” (p.10).

Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo desarrollará una investigación conceptual y hermenéutica iniciando con la definición de conflicto no internacional y su recuento histórico propiamente en Colombia, en segundo lugar, se identificará el concepto de víctima su evolución y marco normativo en Colombia, seguidamente se establecerá el concepto y normatividad internacional de violencia sexual en el marco del conflicto armado no internacional y su reconocimiento como crimen de guerra y lesa humanidad, posteriormente se analizarán sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de identificar la línea jurídica y aspectos normativos relevantes e importantes que tiene la Corte Interamericana para emitir sus fallos. Finalmente se abordarán los delitos de violencia sexual intrafilas como delito generado por las dinámicas propias al interior de los grupos armados y el reconocimiento de las víctimas de estos delitos en el marco de la ley 1448 del 2011 y por último se analizará la decisión de la Corte Constitucional que amplía el espectro de aplicación e interpretación de la norma en mención.

## **1. Víctimas del conflicto armado no internacional en Colombia**

### **1.1 Definición de víctima en el marco del conflicto armado no internacional**

La categoría de víctima es ambigua y flexible, considerándose como un recurso clasificatorio para demandar el acceso a prerrogativas estatales traducidas en reparación de los daños causados, limitándose a una categoría jurídica que también tiene una carga simbólica y política que genera una apropiación social de la misma, así las cosas, el concepto de víctima es variable, no tiene un contenido único y la determinación de una persona o grupo como víctima es parte de un proceso histórico social, cultural, político y económico en el que intervienen diferentes actores (Guglielmucci, 2017).

Para el Derecho internacional el concepto de víctima hace referencia a la persona que ha sufrido un daño con ocasión a la vulneración de un derecho reconocido por un tratado internacional en virtud de una acción u omisión del mismo Estado. El actual reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica por su parte que el término víctima “significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo con la sentencia proferida por la Corte” (CIDH, 2009, p.3). Si bien inicialmente la Corte en su jurisprudencia hace una aplicación estricta de la noción de víctima, en la jurisprudencia actual ha extendido el

reconocimiento de la condición de víctima a personas que en un primer momento no eran reconocidas como tal.

## **1.2 Marco normativo de calidad de victima en el conflicto armado no internacional en Colombia**

En Colombia el reconocimiento de víctima se generó por primera vez en el marco del conflicto armado no internacional con la Ley 975 de 2005 Ley de Justicia y Paz “la cual genero un gran avance en el reconocimiento del estatus político y jurídico de las víctimas, de sus derechos y de la responsabilidad del Estado en su atención y protección” (Bello, M. & Otros, 2013, p.10). la cual posibilito la creación de herramientas de reparación administrativa. Así mismo mediante sentencia de C-370 de 2006 la Corte Constitucional amplio las garantías de los derechos de las victimas lo cual contribuyo a la modificación de algunas disposiciones de la Ley 975 de 2005.

Por su parte, la ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Decreto Ley 4633 de 2011 y el Decreto Ley 4635 del 2011 se generaron en el marco de la justicia transicional, configurándose como instrumentos jurídicos que contemplan el acceso de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

Así las cosas, el propósito de la ley 1448 del 2011 es proveer una inclusión integral a las víctimas del conflicto armado creando mecanismos de asistencia, prevención, reparación integral, acceso a la justicia y por consiguiente reducir las condiciones y situaciones de vulnerabilidad. Es importante resaltar que su vigencia de conformidad con el artículo 208 es de diez años a partir de su promulgación, es decir, a partir del 10 de junio de 2011 hasta el 10 de junio de 2021. Es así como las sentencias emitidas por la Corte Constitucional relacionadas con la constitucionalidad de las diferentes disposiciones contenidas en la ley 1448 del 2011 han establecido criterios de aplicación que deben tenerse en cuenta al momento del reconocimiento de los derechos y de la calidad de víctima.

En ese sentido la Corte Constitucional en sentencia C-781 de 2012 indicó que la expresión *con ocasión del conflicto armado* que se encuentra en el artículo 3 de la ley 1448 de 2011 “tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado” (p.112) incluyendo de esta manera todas aquellas situaciones fácticas que con el transcurso del tiempo se vienen presentando con ocasión al conflicto armado interno

colombiano configurándose como uno de los primeros aspectos indispensables para el reconocimiento de la calidad de víctima.

Como segundo aspecto de aplicación se tiene el criterio temporal, mediante Sentencia C-250 de 2012 la Corte analizó la expresión del artículo 3 de la ley 1448 del 2011 que establece un límite temporal *a partir del 1º de enero de 1985* para la aplicación de dicha normativa afirmando que el legislador está en la facultad de establecer delimitaciones temporales al concepto de víctimas, pues al no realizar dicha limitación “generaría expectativas de imposible satisfacción que acarrearían responsabilidades ulteriores al Estado Colombiano” (p.86) . Adicionalmente, consideró que “la fecha del primero de enero de 1985 precisamente cubre el período histórico en el cual se produce el mayor número de víctimas y se agravan las violaciones al derecho internacional humanitario y en las normas internacionales de derechos humanos” (p.87)

Como último elemento se tiene un criterio material por cuanto la ley 1448 del 2011 establece que solo se consideraran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, lo anterior en virtud a que Colombia es parte de los cuatro convenios de Ginebra de 1949 al igual que de sus dos protocolos adicionales de 1977, lo cual implica la obligatoriedad del cumplimiento de las normas de Derecho Internacional Humanitario para Colombia que no solo se desprende de la aprobación de los convenios en mención, sino también de su carácter consuetudinario como imperativo humanitario es decir como normas de *ius cogens*.

### **1.3 Marco normativo internacional relacionado a la protección de la mujer en el conflicto armado**

Teniendo en cuenta el contexto histórico del conflicto armado no internacional en Colombia, el concepto de víctima y el marco normativo existente en relación con el reconocimiento de la calidad de víctima en el derecho internacional y nacional es pertinente realizar un análisis de las mujeres como víctimas del conflicto armado y su protección, inicialmente describiendo y estudiando los instrumentos jurídicos internacionales dirigidos a evitar cualquier tipo de discriminación contra la mujer y posteriormente analizar la resolución



1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU la cual está relacionada con la protección de la mujer en los conflictos armados.

- **Declaración Universal de Derechos Humanos**

En la Declaración Universal de Derechos Humanos si bien no se realiza una mayor referencia al tema de los derechos de la mujer si establece la defensa de los derechos de las personas como un ejercicio irrenunciable de los sujetos de derecho internacional.

Así las cosas y teniendo en cuenta la responsabilidad estatal de garantizar los derechos y prerrogativas que constituyen normas de ius cogens de derecho internacional, se funda “el argumento jurídico-social de protección y discriminación positiva hacia condiciones especiales de la mujer, siendo una de ellas la de protección frente a situaciones de conflicto” (Bohórquez, 2018, p.15).

- **Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW**

La Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación es el principal instrumento de protección de los derechos de las mujeres y obliga a los Estados parte a tomar las medidas pertinentes para asegurar su plena igualdad, fue ratificada por Colombia mediante la ley 51 de 1981 configurándose de esta manera en un hito histórico en la protección de los derechos de las mujeres, por cuanto establece que independientemente de los “instrumentos jurídicos existentes que consagran la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la discriminación contra la mujer sigue existiendo en todas las sociedades” (Bohórquez, 2018, p.15).

A través del tiempo los diferentes derechos y obligaciones establecidos en la convención se han ampliado con ocasión a las diferentes Recomendaciones entre las cuales se encuentra la: 1) Recomendación N° 19 relacionada a la violencia contra la mujer, 2) Recomendación N° 24 que se relaciona con la mujer y la salud 3) la Recomendación N° 26 sobre las trabajadoras migrantes. Lo anterior permite afirmar que la ampliación del espectro relacionado con los derechos de las mujeres ha permitido la creación de directrices internacionales para situaciones específicas como lo son los casos de protección de la mujer en el marco del conflicto armado.

- **Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belém do Pará”**

La Convención Interamericana para Revenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) establece como uno de los deberes de los Estados el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia traducida en acciones consecutivas. Es así como la convención Belém do Pará (1994) define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (p.1). e indica como modalidades de violencia; 1) física 2) sexual 3) psicológica materializadas en delitos como: la violación, el abuso sexual, la tortura, trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y el acoso sexual.

Finalmente establece que el conflicto armado es un espacio generador de mayor vulneración de derechos de las mujeres, lo cual implica la obligación por parte del Estado de establecer mecanismos de protección especiales.

- **Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado.**

La Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1974 y establece que la mujeres y los niños son sujeto de vulneración de derechos en el marco del conflicto armado debido a la supresión, agresión, racismo, dominación extranjera por tanto prohíbe los ataques y bombardeos contra la población civil en especial contra los niños y mujeres por cuanto son sujetos de especial protección y como consecuencia prohíbe la realización de actividades como: la reclusión, tortura, ejecuciones, detenciones en masa, castigos colectivos, destrucción de viviendas y desalojo forzoso por parte de los actores dentro del conflicto armado pues son reconocidos como actos criminales.

- **Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer**

La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 48/104 del 20 de diciembre de 1993 y establece que: “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de

poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer” (p.1). Propiamente en su artículo 1 indica que la violencia contra la mujer será entendida como:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (p.2).

La declaración insta a los gobiernos a invertir en todo el personal que está directamente relacionado con la identificación, investigación y juzgamiento de diferentes actos de violencia contra la mujer con el fin de evitar abusos de poder, así mismo sensibilizar a ese personal respecto a la “naturaleza de los actos y amenazas de violencia basados en género para que se garantice el tratamiento justo de las víctimas”. (Bohórquez, 2018, p.19). De igual manera establece estándares de cumplimiento de conformidad con el derecho internacional para proteger a las mujeres involucradas en situaciones generadas en el marco del conflicto armado.

## **2. Violencia sexual contexto general**

La violencia sexual además de ser una dinámica histórica y cultural mediante la cual el hombre ha construido su identidad es una grave violación a los derechos humanos que, de conformidad a diversos contextos sociales y situaciones, se incrementa y agrava. Moncayo (2009) afirma que la definición de violencia sexual en muchas situaciones “se sustrae al aspecto corporal de la mujer dentro del ámbito jurídico penal, en el que tal concepto responde a una construcción técnica legislativa, donde la violencia (...). debe verse plasmada de una u otra manera, en el cuerpo de la mujer” (p.33).

En el Informe mundial sobre la violencia y la salud la violencia sexual de la OMS (2003) establece que la definición de violencia sexual:

Comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca igualmente innumerables consecuencias del comportamiento violento (p.161)

La violencia sexual tanto física como psicológica afecta y lesiona gravemente la dignidad humana, los derechos humanos y fundamentales de cualquier persona, el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual (2016) indica que “La violencia sexual es cualquier tipo de contacto sexual no deseado. Esto puede incluir palabras y acciones de índole sexual contra la voluntad de una persona y sin su consentimiento” (p. 1).

Teniendo en cuenta los conceptos antes mencionados en Colombia se puede establecer que los diferentes actores dentro del conflicto armado no internacional posibilitan la creación de ambientes para la comisión de delitos de violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes los cuales se han llevado a cabo de manera sistemática, generalizada, planeada; y han sido usados como medio de guerra para el control, presión social y ocupación ilegal

La utilización de la violencia sexual como estrategia de guerra; violencia física como verbal que consigue intimidar y hostigar sexualmente a la mujer, configura una forma de tortura para las mujeres y su familia, permitiendo con ello la efectividad de la legitimación de manera arbitraria que al realizarse de manera sistemática o generalizada constituyen un delito de lesa humanidad o crimen de guerra según sea el caso. En Colombia dichas acciones han sido visibilizadas mediante las denuncias de Organizaciones no Gubernamentales y por las propias víctimas.

En Colombia si bien los delitos de violencia sexual se encuentran contenidos en la ley 906 del 2004, la Corte Constitucional mediante auto 092 de 2008 se pronunció en relación con la protección de los derechos de las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado no internacional reconociendo la existencia de la comisión de delitos de violencia sexual y por tanto indico que “la violencia sexual es crimen grave que compromete la responsabilidad penal nacional e internacional de sus perpetradores” (p.2)

Dichos delitos de violencia sexual también pueden ser considerados como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad pues de conformidad con la normatividad internacional como los Convenios de la Haya de 1889 y 1907, de Ginebra de 1925 y 1949 y sus Protocolos adicionales en los que listan aquellas conductas que pueden ser consideradas como crímenes de guerra se encuentran los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto enmarcados en el Estatuto de Roma literal e) “Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacionales dentro del marco establecido de

derecho internacional, a saber...” (p.6) del artículo 8 en el cual se establecen aquellas conductas consideradas como crímenes de guerra, propiamente el inciso vi indica que se consideran como crímenes de guerra.

Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra” (p.6)

Por otra parte el Estatuto de Roma aprobado en Colombia mediante la Ley 742 de 2002 reconoce que la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilidad forzada y otros actos que constituyan abusos sexuales se entienden como crímenes de lesa humanidad, siempre que formen parte de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil y el Estado colombiano al haber ratificado dicha normativa de carácter internacional reconoce la violencia sexual como un delito de lesa humanidad.

Así las cosas, la Corte Constitucional mediante sentencia C-578 del 2002 considera que las disposiciones contenidas en el Estatuto de Roma en especial lo concerniente a la definición de crímenes de lesa humanidad protegen la efectividad en la protección de los derechos a la vida, así como también establece la prohibición de torturas y desapariciones, la igualdad y la prohibición de la esclavitud. Adicionalmente destaca la importancia del sistema de protección de derechos humanos como una herramienta adicional para la lucha contra la impunidad en materia de graves violaciones a los derechos humanos.

### **3. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos**

Con el fin de establecer la línea jurídica y por tanto los argumentos jurídicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de delitos de violencia sexual se realizará el análisis de 4 sentencias:

#### **3.1 Rosendo Cantú V/S México Sentencia de 15 de mayo del 2011**

La Corte indica que de conformidad con la Convención de Belém do Pará, la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (p.85) que se pueden presentar en todos los sectores de la sociedad, así mismo indica y en concordancia con la jurisprudencia internacional que la

violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno, puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales y persigue fines como degradar, humillar, castigar o controlar.

### **3.2 Mujeres torturadas sexualmente V/S México Sentencia del 28 de noviembre del 2018**

La Corte mediante sentencia del 28 de noviembre del 2018 establece que en concordancia con la jurisprudencia internacional la violencia sexual:

- Se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento y “constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima” (p.71), así mismo, resalta que los actos de violencia sexual en mujeres que se encuentran detenidas o en custodia de un agente estatal es un acto grave y reprochable.
- Es cualquier acto de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Para que un acto sea considerado violación sexual, es suficiente que se produzca una penetración, por superficial que sea, en los términos antes descrito.
- Se ha utilizado en los conflictos armados como un medio simbólico para humillar a la parte contraria o como un medio de castigo y represión. En este sentido, ha resaltado cómo la utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección.
- No tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad en un estado obligado por la convención americana, la convención de Belém do Pará y la convención interamericana contra la tortura.

### **3.3 González y otras V/S México Sentencia de 16 de noviembre de 2009**

La Corte indica que las autoridades gubernamentales del Estado Mexicano tenían conocimiento de las diferentes situaciones de violencia sexual contra las mujeres y niñas en la ciudad de Juárez y no tomo las medidas necesarias para prevenir la violencia, erradicar la discriminación y sancionar a los que cometieron dichos actos contra la mujer, también establece que en el caso objeto de estudio existieron irregularidades en la investigación, custodia de la escena del crimen, recolección y manejo de las evidencias, elaboración de autopsia y el juzgamiento.

En esta Sentencia, la Corte utiliza la expresión “homicidio de mujer por razón de género” y reconoce que muchos de los hechos y casos existentes en la ciudad de Juárez posiblemente fueron cometidos únicamente porque las víctimas fueron mujeres. No obstante, lo anterior, decide referirse a ellos como homicidios de mujeres por considerar que no es posible pronunciarse de manera definitiva e inequívoca sobre cuáles de los homicidios contra mujeres en la ciudad de Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género.

La corte reconoce los derechos de las víctimas y sus familiares por tanto declara que el Estado Mexicano es responsable internacionalmente por la falta de diligencia en las investigaciones adelantadas con ocasión a la desaparición y asesinato de las 3 jóvenes. También establece el pago de indemnización de perjuicios como lucro cesante daño emergente como daños materiales y daño moral y daño al proyecto de vida de las víctimas como daño inmaterial. Es la primera sentencia de la Corte en la que adopta una postura de género y el fallo represente un hito importante en el acceso de las mujeres a la justicia dando lugar a que en el Derecho Internacional se presentes los primeros pasos para la igualdad formal y material de las mujeres ante la ley.

### **3.4 Masacre de pueblo bello V/S Colombia Sentencia de 31 de enero de 2006**

La Corte establece la importancia y la obligación por parte del Estado colombiano de investigar los hechos objeto de análisis, así mismo resalta el deber de prevenir y proteger los derechos a la libertad, integridad personal, vida de las víctimas, garantías judiciales y a la protección judicial. En este último aspecto precisa que la investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria no representaron un recurso efectivo para garantizar, en un

plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida con plena observancia de las garantías judiciales.

Así mismo menciona que, si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos paramilitares, dichas acciones no podrían haberse llevado a cabo si hubiera existido una protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible por miembros de las miembros responsables de la seguridad del Estado. Si bien es cierto no existen pruebas que evidencien que el Estado dirigió directamente la ejecución de la masacre o que existió un nexo entre miembros del Ejército y los grupos paramilitares la responsabilidad por los hechos de los miembros del grupo paramilitar en el caso en particular es atribuible al Estado por cuanto no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil

La Corte concluye que el Estado Colombia es responsable Internacionalmente puesto que no cumplió con su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, por haber incumplido sus deberes de prevención y protección, en perjuicio de las personas desaparecidas y privadas de sus derechos. En este caso, por ser garante en la situación de conflicto armado que imperaba en esa zona y que habría llevado al propio Estado a adoptar medidas particulares.

### **3.5 J. V/S Perú Sentencia de 27 de noviembre de 2013**

Los hechos que se estudian en la presente sentencia son la presunta detención ilegal y arbitraria de la señora J y los registros domiciliarios realizados el 13 de abril de 1992 por parte de agentes estatales, quienes presumiblemente incurrieron en actos crueles y de tortura, inhumanos y degradantes, incluida la violación sexual de la víctima. Un proceso abierto contra la señora J. con una orden de captura internacional.

La Corte indica que el literal 7.b de la Convención de Belém do Pará exige de manera específica a los Estados, actuar con la debida diligencia para prevenir, condenar y erradicar la violencia contra la mujer. Consecuentemente precisa que la violación sexual no implica necesariamente una relación sexual sin consentimiento, por vía vaginal, como se consideró tradicionalmente. Por violación sexual también debe entenderse actos de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril, en ese sentido



cualquier tipo de penetración, por insignificante que sea, es suficiente para que un acto sea considerado violación sexual.

Finalmente la Corte establece que la violencia sexual se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores, por tanto, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho, no obstante lo anterior, las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente y por tal razón advierte que no es obligatorio que las víctimas de violencia sexual deban reiterar en cada una de sus declaraciones el abuso y maltrato de que fueron víctimas para evitar la re victimización y refiere los artículos 96 de los Reglamentos de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda establecen que en los casos de agresiones sexuales no se requerirá corroboración del testimonio de la víctima Por tanto, no resulta razonable exigir que las víctimas de violencia sexual deban reiterar en cada una de sus declaraciones o cada vez que se dirijan a las autoridades los mencionados maltratos de naturaleza sexual.

#### **4. Delitos de violencia sexual intrafilas en Colombia**

La violencia sexual en el marco del conflicto armado es un fenómeno que se remonta a la antigüedad, con escenarios tales como:

Rapto de las sabinas en los orígenes de la Roma antigua, hasta acontecimientos documentados como las violaciones masivas de mujeres alemanas por parte del Ejército soviético – entre 100.000 y un millón de mujeres alemanas pudieron haber sido víctimas de esta violencia–, o el fenómeno de las “mujeres confort”, esclavas sexuales al servicio del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial (Villellas, M. & Otros, 2017, p. 58).

Sucesos que permiten establecer que la comisión de este tipo de conductas se ha constituido como un arma de guerra y un mecanismo de desestabilización de las partes vinculadas o participantes en el conflicto.

Este tipo de violencia implica entonces, una agresión contra la vida e integridad física o mental dirigidos contra hombres o mujeres. Sin embargo, se ha reconocido

mayoritariamente que la víctima de estas acciones es la mujer, en tanto este tipo de violencia tiene lugar en estructuras de poder en donde predomina el poder masculino. (Fiscó, 2005, p. 136). Es así como la Organización Mundial de la Salud, señalo que la Violencia Sexual:

No se refiere únicamente a la violación, entendida como el acceso carnal violento, sino que incluye el embarazo forzado, el aborto forzado, la anticoncepción forzada, la esclavitud sexual, la desnudez forzada, la explotación sexual, la prostitución forzada. Y en esta guerra pueden perpetrarse todos estos delitos en una sola mujer.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso del Conflicto Armado Colombiano de carácter no Internacional, se puede advertir que según Amnistía Internacional la Violencia Sexual, comprende:

Abusos, violación, mutilación genital, explotación sexual, secuestro de mujeres para que presten servicios sexuales a mandos militares o políticos de los diversos actores armados, reclutamiento de mujeres y niñas de las que posteriormente sus compañeros han abusado sexualmente y la imposición que obliga a las propias combatientes a abortar y utilizar métodos anticonceptivos como algunas de las modalidades de violencia sexual en el conflicto armado colombiano (Amnistía, 2004)

Ahora bien, en caso de la ocurrencia de los delitos sexuales al interior de los Grupos Organizados al Margen de la Ley, se ha evidenciado que el proceso de adoctrinamiento “implica el entrenamiento de las personas; sus cuerpos que deben ser contruidos para la guerra y la disciplina militar.” (CDMH, 2017, p. 115), es por ello que, a través de una investigación adelantada por la Universidad Nacional de Colombia, se pudo establecer que las causas de la materialización de hechos de violencia sexual intrafilas, en el marco del conflicto armado colombiano no internacional, obedece a acciones de carácter:

- Regular: Cometida o aplicada contra las mujeres que desobedecen los mandatos del actor armado que controla la región,
- Castigar: Retaliación contra una persona o contra el grupo o comunidad a la que pertenece porque se la identifica como enemiga, por sus posiciones políticas o trabajo social, o porque se la vincula con el enemigo, por tener relaciones sentimentales con ellos, colaborar en forma obligada o voluntaria, o tener familiares enrolados

- **Recompensar:** Compensar al miembro o miembros del grupo armado como consecuencia de un trabajo considerado bien realizado por sus jefes inmediatos
- **Cohesionar:** Violencia sexual cometida para mantener la unidad y el control del grupo ilegal a través de la disciplina del cuerpo, la regulación de las relaciones sexuales y el control de los nacimientos; corresponde a la violencia intrafilas que no compromete a la población civil sino a las mujeres combatientes. (Galvis, 2009, pág. 19)

Es así como la H. Corte Constitucional acogió una definición amplia del concepto de violencia sexual, la cual incorpora los estándares internacionales desarrollados durante la década de los noventa por el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, según la cual:

La violencia sexual no se limita a la invasión física del cuerpo humano, sino que también incluye actos que no implican penetración o contacto físico, como sería el caso de la desnudez forzada y la exposición pública, que la Corte las considera conductas delictivas. (C. Constitucional Auto 092 /2008)

En ese sentido, puede advertirse que la victimización que tiene ocurrencia con ocasión al conflicto armado no internacional Colombiano, es susceptible de la consumación de este tipo de conductas que revisten una connotación penal, al materializarse agresiones tanto físicas como psicológicas en las personas que forman parte del conflicto armado, en las que se incluyen a los mismos miembros de los grupos armados, pues tal y como se indicó anteriormente dentro de las estructuras militares, se ha hecho uso de la violencia sexual como una herramienta de sometimiento y control.

Las formas en las que se asume la violencia sexual dentro del conflicto armado interno, y las características propias de sus dinámicas, se pueden relacionar entonces directamente con la forma en la que el grupo organizado al margen de la ley se encuentra organizado al su interior, pues las victimizaciones según las estructuras organizacionales están permeadas por una visión en la que se legitima la violencia contra la mujer.

Ahora bien, si bien es cierto el Estado colombiano a través de su marco normativo ha reconocido a las víctimas de violencia sexual en el marco del Conflicto Armado Colombiano no internacional, las cifras y datos consultados en diferentes procesos investigativos, han dado cuenta, que los vejámenes a los que está sometida la mujer que pertenece a los Grupos Organizados al Margen de la Ley, forma parte de un universo de victimización que por la

condición de la Víctima, no se encuentra contemplado de manera expresa en la Ley 1448 de 2011.

La violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado no internacional resulta entonces una conducta que por su naturaleza se consume de manera generalizada, sistemática y discriminatoria, pese a estar regulada tanto por normas nacionales como internacionales. Ello a que no obstante su connotación como un delito internacional de lesa humanidad y crimen de guerra, en el marco de la situación colombiana ha sido considerada como un instrumento más que permite no solamente el control al interior de la organización del grupo armado, sino también como herramienta para infundir terror en la población en general, así como un medio de control territorial.

#### **4.1 Reconocimiento de víctima de delitos de violencia sexual intrafilas dentro de la ley 1448 de 2011.**

La Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se establecen las disposiciones relativas a la atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado no internacional, como se indicó en apartes anteriores, corresponde a un marco normativo, que no solamente crea una institución de orden ejecutivo que contribuye a la materialización de los principios y derechos de las víctimas del conflicto y que corresponden a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; sino que comprende parámetros para que a través del Registro Único de Víctimas – RUV - accedan a medidas de asistencia y reparación; ello de conformidad a la fecha de ocurrencia de los hechos y los hechos victimizantes sufridos por las víctimas. En ese sentido, el artículo 3 de la norma en cita, establece una definición taxativa de lo que, para efectos de la aplicación de las prerrogativas señaladas en esta ley, se entiende como víctima.

Resulta oportuno indicar que el RUV no confiere la calidad de víctima, pues esta se adquiere con la ocurrencia de uno o varios hechos victimizantes; es así como la inscripción en dicho instrumento constituye un trámite administrativo que tiene como finalidad declarar la condición de víctima, y permitir el acceso a los beneficios legales y mecanismos de protección de sus derechos.

Sin embargo, para el caso de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que para la ocurrencia de este hecho victimizante, se encontraban como miembros activos de un grupo organizado al margen de la ley, se establece una restricción exclusiva

para acceder a las garantías previstas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), en atención a que el artículo 3 de esta norma, en su parágrafo segundo, indica de manera expresa:

Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. (p.2)

Es por ello, que los antecedentes que se presentan en los casos relativos a violencia sexual, tal y como se señala por la H. Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU – 599 de 2019, frente a las personas que han sufrido violencia sexual como integrantes de grupos organizados al margen de la ley

en aplicación de la ley y la jurisprudencia constitucional vigente, se podría concluir que debería: (i) negársele el reconocimiento de su calidad de víctima del conflicto armado interno, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, y, por ende, rechazarse su solicitud de inclusión en el RUV, justificando dicha determinación en el hecho de que fue excombatiente de las FARC y que se desmovilizó siendo mayor de edad; y (ii) direccionársele a acudir a otros mecanismos de reparación, diferentes al de la Ley 1448 de 2011, y al proceso de reintegración social. (p.51)

La anterior sentencia resulta de relevancia para el tema objeto de estudio, en consideración a que se configura como un hito en la aplicación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas) respecto a la modificación de los criterios descritos en la norma en mención para establecer quienes se consideran víctimas y por ende sujetos de las medidas resarcitorias contempladas en la norma citada, tal y como se indicara más adelante, pues se establece la posibilidad que los miembros de grupos organizados al margen de la ley, víctimas de violencia sexual en intrafilas puedan ser considerados víctimas en los términos ya indicados.

#### **4.2 Derecho a la igualdad en el marco de la ley 1448 del 2011**

En el marco de la definición de víctima propuesta por el Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se prevén unos presupuestos, para que la persona que ha sufrido un hecho victimizante, a la luz de la normativa en mención, tenga acceso no solo a la reparación administrativa a la que tiene derecho, sino también a la oferta institucional de las diferentes entidades que forman parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas –

SNARIV. En ese sentido, se disponen criterios para la Inclusión en el Registro Único de Víctimas referentes a: la temporalidad, el hecho victimizante, relación de consanguinidad con la víctima directa; y, excepciones respecto de las cuales los beneficios legales contemplados en favor de las víctimas no serán aplicados.

Respecto de las anteriores consideraciones, se contempla entonces 3 escenarios, que resultan de relevancia, a saber:

1. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.
2. El o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.
3. No serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. (L. 1448/2011, Art. 3)

Frente a la presunta vulneración al derecho a la igualdad, que de manera taxativa establece la Ley 1448 de 2011, respecto a la Inclusión y por ende el reconocimiento del hecho victimizante de violencia sexual para ex miembros de grupos organizados al margen de la ley, la Corte Constitucional a través de Sentencia T – 299 de 2018, MP ALEJANDRO LINARES CANTILLO, advierte que dicha exclusión:

Se trata de un ejercicio de la libertad de configuración del legislador, que este puede ejercer de manera razonable, sin incurrir en discriminación, [...], pues la Ley 1448 de 2011 prevé la posibilidad de que los miembros de grupos armados al margen de la ley que consideren haber sido víctimas [...] puedan ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (p.20)

En atención a lo indicado, frente al principio de igualdad la Corte Constitucional mediante sentencia C – 006 de 2017, señala que el mismo:

Posee un carácter relacional, lo que significa que deben establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un examen de

adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el Legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente; y, finalmente, debe constatarse si se presenta un tratamiento distinto entre iguales (o igual entre desiguales) y si este resulta razonable. (C. Cont. Sentencia C-006, 2017, p.21)

Es claro entonces, que frente a la comisión de conductas que constituyen violencia sexual, en el caso de las personas que fueron miembros de grupos organizados al margen de la ley, se puede predicar una doble condición que se excluye por parte del Tribunal Constitucional, es decir, la calidad de víctima y victimario, en el entendido de que si bien es cierto tanto mujeres como niños participaron activamente en las hostilidades (ya sea de manera voluntaria o forzada), también, fueron víctimas de hechos que vulneraron sus derechos personales, y que a la luz de las disposiciones internacionales adoptadas por Colombia, estas están calificadas como crímenes de lesa humanidad en el marco de confrontaciones armadas<sup>2</sup>.

Ahora bien, se precisa que las únicas condiciones que en el marco del derecho a la igualdad se encuentran contempladas en la Ley 1448 de 2011, refieren a lo descrito en el artículo 6<sup>3</sup>, pues en el caso de las víctimas de violencia sexual que fueron miembros activos de grupos organizados al margen de la ley y cuya desvinculación tuvo lugar después de la mayoría de edad, de conformidad a los presupuestos legales y jurisprudenciales la ruta correspondiente a una atención integral y su reincorporación se encuentra relacionada con la oferta institucional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Procesos que se encuentran ligados a una Reintegración Social y Económica de los desmovilizados, en calidad de excombatientes y no en calidad de víctimas, como ocurre en el caso de los sujetos

---

<sup>2</sup> Estatuto de Roma. Artículo 7

<sup>3</sup> Las medidas contempladas en la presente ley serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica.

pasivos de la violencia sexual intrafilas. Sobre el particular, ha sido la misma Corte Constitucional que ha señalado:

Aquellos miembros de los grupos guerrilleros que hayan sufrido algún daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridos con ocasión del conflicto armado interno, tienen la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico para garantizar sus derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación y conservar la vigencia de las prescripciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que han brindado protección a todas las personas en el marco de los conflictos armados internos. (C. Cont. Sentencia C 253 A – 2012)

No obstante, lo anterior, dicha corporación frente a las víctimas de violencia sexual intrafilas, concluyo que el acercamiento de estas víctimas a las diferentes instituciones puede dar lugar a una mayor afectación de sus derechos, en consideración a que se aumentaría la sensación de desprotección, culpa o estigmatización; motivo por el cual el Estado debe procurar un acceso efectivo a la justicia y demás escenarios que garanticen el resarcimiento de los daños o perjuicios causados. (C. Cont. Sentencia T-211 de 2019)

Lo anterior, da cuenta de que si bien por parte de la norma se establece una disposición expresa en la que se espera que la aplicación de la Ley 1448 de 2011 se fundamente en el principio de igualdad, se contemplan excepciones que resultan excluyentes respecto de la condición de víctima de violencia sexual intrafilas y un desconocimiento de que los hechos perpetrados en contra de ex miembros de grupos organizados al margen de la ley, sucedieran en el marco de las hostilidades; restringiendo y/o limitando el acceso a la oferta institucional a su condición de desmovilizado y no como víctima del conflicto armado no internacional en Colombia.

#### **4.3 Decisión de la Corte Constitucional que amplía la implementación de la ley 1448 de 2011**

Advertir que cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos de las mujeres en el marco del conflicto armado no internacional, debe considerarse como una violación a los



principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, comporta el hecho de identificar no solo el contexto de la ocurrencia de los hechos y su finalidad, sino la condición del destinatario de dichas agresiones, y por ende establecer las acciones afirmativas por parte del Estado, a fin de garantizar la no repetición de estos hechos.

En ese sentido, desde una perspectiva macro o internacional, resulta oportuno indicar que Colombia como Estado/País miembro de las Naciones Unidas tiene a cargo el cumplimiento de las obligaciones contenidas en nueve resoluciones sucesivas sobre Mujeres, Paz y Seguridad<sup>4</sup>. Es así como, no solo la expedición de normatividad y presencia estatal tendiente a la mitigación o eliminación de escenarios de violencia sexual implica decisiones de orden interno en el marco del conflicto armado, sino que también obedece al cumplimiento de mandatos de orden internacional, de organizaciones de la cual Colombia forma parte.

Mencionar un escenario normativo internacional sobre la materia implica entonces tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY), pues a través de sus fallos se evidencio un progreso importante en materia de violencia sexual, al considerar los actos de violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de violencia sexual. Entre los fallos representativos encontramos:

**a) Caso Prijedor (Fiscalía vs Tadic):**

El tribunal mediante sentencia del 7 de mayo de 1997 condena al Oficial Tadic por crímenes relacionados con persecuciones y tratos crueles e inhumanos perpetrados contra civiles de la comunidad de Prijedor (torturas, agresiones sexuales, abusos físicos y psicológicos). Pese a que a través de este fallo no se condenó por crímenes sexuales, si se indicó en su parte considerativa que la violencia sexual podría considerarse como un crimen de lesa humanidad cuando tales eventos nieguen los derechos humanos reconocidos en la carta de las Naciones Unidas. De igual manera se resaltó la importancia de aplicar el principio de fiabilidad de los testimonios de la víctima de violencia sexual, sin corroborar la información.

**b) Caso Foca (Fiscalía vs Kunarac, Vukovi, Kova)**

A través de sentencia del 22 de febrero de 2001, el tribunal de conocimiento evidencio que los acusados utilizaban las violaciones como un instrumento de terror, incurriendo en

---

<sup>4</sup> Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, Beijing – China.

ataques generalizados y sistemáticos contra civiles con el fin de conseguir un objetivo específico. La sala declaró responsables penalmente a: Kunarac por los actos de violación y esclavitud como crimen de lesa humanidad y tortura, violación, y ultrajes a la dignidad personal como una violación a las leyes o costumbres de la guerra (párr. 54), a Kova por los actos de esclavitud y violación como crímenes de lesa humanidad y violación y ultrajes a la dignidad personal como una violación a las leyes y costumbres de la guerra (párr. 76) y a Vukovic por crímenes de tortura y violación como crímenes de lesa humanidad y violaciones a las leyes y costumbres de la guerra. (párr. 88) Este caso es de relevancia, en consideración que los cargos y el fallo se centraron en la violación y delitos conexos a la violencia sexual, condenando de manera exclusiva a los combatientes y condenar la esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad.

### **c) Caso Furundzija vs Fiscalía**

Con sentencia de 1998 el tribunal de conocimiento profirió sentencia contra Furundzija, por delitos de tortura y atropellos contra la dignidad humana, con ocasión a las agresiones físicas y psicológicas dirigidos a sujetos del pueblo de Nadioci de Bosnia, en especial una mujer musulmana que fue víctima de desnudez forzada y violación por varios soldados, con la finalidad de obtener información sobre una situación en particular.

A través de este fallo se analizó por primera vez la responsabilidad de quien no participa directamente en los vejámenes, en ese sentido resultara responsable quien actúe a través de otros, ayude o fomente la comisión de la conducta penal. Así mismo el Tribunal “confirmó el carácter de crimen de guerra de la violación, en virtud del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra relativos a los conflictos armados que no sean de índole internacional” (p. 13) Esta decisión radica su relevancia debido a que a través de esta decisión se contribuyó a la concepción de que la violencia sexual puede constituir una infracción al Convenio de Ginebra de 1949.

Las anteriores decisiones permiten establecer, que en el marco de conflicto armado tanto internacional como no internacional existen conductas reprochables que superan las permisiones legales para el uso de armas o herramientas pueden ser usadas en el marco de las hostilidades. Situaciones que implican en sí mismas una necesidad de ser no solamente sometidas a un juzgamiento ante un Juez, sino que requieren que las garantías procesales

permitan la materialización de esos principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en la que el reconocimiento como víctima, es la puesta de entrada para reivindicar sus derechos y tener una atención oportuna e integral por parte del Estado con ocasión a la materialización de este tipo de vejámenes, como lo es la violencia sexual.

Para el caso de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado no internacional colombiano, tal y como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, el marco normativo y las decisiones por parte de la corte constitucional, ha establecido una serie de restricciones para el reconocimiento de la condición de víctima de quienes pertenecieron a grupos organizados al margen de la ley, y participaron en un proceso de desmovilización. Es así como, el proceso de valoración de la solicitud de inclusión en el registro único de víctimas por parte de la Unidad para las Víctimas, se limite en un primer momento a la calidad de quien presenta la declaración administrativa, por expresa remisión normativa que contempla la Ley 1448 de 2011.

Es así como, se puede advertir que el proceso administrativo contemplado en la ley en mención y reglamentado a través del Decreto 1084 de 2015, prima facie solo contempla un análisis de contexto y normativo, que limita la concreción de normatividad internacional que ha sido acogida por Colombia.

Siendo entonces oportuno traer a colación el caso de los niños soldados en el fallo “The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”, en el que la Corte Penal Internacional

Sostuvo que el DIH “no contiene una regla general que excluya a los miembros de un grupo armado de protección por crímenes cometidos por miembros del mismo grupo armado. Luego, en particular sobre los crímenes de guerra de violación y esclavitud sexual, la Corte consideró que su prohibición se encontraría bien establecida en el Derecho Internacional Humanitario, y que nunca existiría una justificación para incurrir en violencia sexual. En virtud de ello, y en ausencia de una regla que excluya a miembros de fuerzas armadas de la protección respecto de agresiones cometidas por miembros de su mismo grupo armado (Fernández, 2018, p. 94).

Este caso, el cual se puede considerar una de las decisiones más importante en temas de violencia sexual intrafilas, abre la puerta al debate propio del presente trabajo y que corresponde a la vulneración del derecho a la igualdad en el reconocimiento de la calidad de

víctima de ex miembros de grupos organizados al margen de la ley, pues a través del fallo mencionado se propuso una nueva postura en la doctrina del Derecho Internacional Humanitario.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2019 la Corte Constitucional, profirió la Sentencia de Unificación 599, en la que se da una interpretación amplia del parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, en lo que refiere propiamente a las víctimas de violencia sexual intrafilas, y a la necesidad de reconocer que “los crímenes intrafilas sí pueden constituir crímenes de guerra, máxime si se trata de crímenes que involucran violencia sexual” (C. Cont. Sentencia SU 599 de 2019), pues la negativa a esta circunstancia genera espacios de impunidad en caso de que dichas contactas revisan la comisión de un delito.

A través de dicha providencia se propone la aplicación del criterio estructurado por la Corte Penal Internacional frente al iniciado contra Bosco Ntaganda, pues

al existir un indiscutible nexo entre el conflicto armado interno colombiano y la comisión de actos de violencia sexual y de género contra las mujeres combatientes, no se podría desconocer la calidad de víctimas que ostentan aquellas mujeres, de conformidad con el artículo 8, numeral 2, literal e del Estatuto de Roma, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad. (C. Cont. Sentencia SU 599 de 2019)

Criterio similar al aplicado en el análisis desarrollado en la sentencia C-781 de 2012, fallo en el que también se afirmó que “es necesario examinar en cada caso si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado” (C. Cont. Sentencia C-781 de 2012) para definir en qué contextos se deben proteger los derechos de las víctimas. Es así como dicha Corporación advierte que:

Sería contrario al Derecho Internacional: (i) negar el reconocimiento de la condición de víctima del conflicto armado interno a las mujeres excombatientes de un grupo armado al margen de la ley, que hayan sufrido por violencia sexual y de género; y (ii) consecuentemente, impedir su acceso a los programas de reparación integral, establecidos en el ordenamiento jurídico nacional o doméstico para restablecer sus derechos fundamentales, bajo el argumento o la justificación de haber pertenecido a un grupo guerrillero, sin importar si fueron reclutadas forzosamente cuando eran menores

de edad, lo cual podría reflejar una carencia de voluntad en la aludida afiliación. (C. Cont. Sentencia SU 599 de 2019)

De lo anterior, la Corte Constitucional en esta providencia concluye que el Estado Colombiano tiene la responsabilidad

De garantizarle a las mujeres que han sufrido por violencia sexual, en el contexto del conflicto armado interno, el acceso a medidas de reparación integral, lo cual sólo puede materializarse a través de su reconocimiento como víctimas; de manera que puedan ser beneficiarias de la Ley 1448 de 2011 y, así, se les pueda permitir su inclusión en el RUV. (C. Cont. Sentencia SU 599 de 2019)

Ello por cuanto las medidas contempladas en el proceso de reintegración social en el proceso de desmovilización tienen objetivos diferentes a los previstos en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), siendo un escenario de vulneración de derechos la remisión a otros mecanismos ordinarios de reparación, pues estos carecen de idoneidad para garantizar una protección de los derechos de la víctima. Dando como resultado, que en el caso examinado por dicha Corporación se ordenara a la Unidad para las Víctimas, la inclusión de la Víctima en el Registro Único de Víctimas y por ende el reconocimiento de los hechos víctimizantes que atentan contra la libertad sexual (violencia sexual).

Las anteriores precisiones expuestas por el Tribunal Constitucional, que de manera implícita modifican los aspectos jurídicos a considerar por parte de la Unidad para las Víctimas en el trámite de las solicitudes en la Inclusión en el Registro Único de Víctimas, de las víctimas de violencia sexual intrafilas permiten establecer que la exclusión.

Plasmada en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 [no] es consistente y coherente con las obligaciones de Colombia a nivel internacional; teniendo en cuenta la naturaleza coercitiva de las prácticas de (los grupos organizados al margen de la ley) acerca de la anticoncepción y el aborto forzado, y considerando la condición de muchas de las víctimas, las cuales eran niñas al momento en que se perpetraron los actos de violencia sexual o que apenas habían cumplido la mayoría de edad. (C. Cont. Sentencia SU 599 de 2019)

Siendo entonces necesario considerar, que la distinción en la calidad de la víctima, si ha constituido una vulneración al derecho a la igualdad, en el reconocimiento de las víctimas

de violencia sexual intrafilas, al desconocer que este tipo de hechos transgreden las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario al constituirse y ser reconocido como un arma de guerra, y cuya reparación no debe entenderse en el marco de un proceso de reincorporación y desmovilización, sino por el contrario una ruta integral, tal y como se encuentra señalada en la Ley de Víctimas, cuya finalidad está encaminada a la garantía y materialización de derechos.

Teniendo en cuenta lo evidenciado respecto a los antecedentes propios del conflicto armado no internacional Colombiano y el marco normativo, se evidencia que el mismo constituye una transición importante en la evolución del concepto de víctima, pues de conformidad a lo ya identificado a lo largo del trabajo se ha pretendido que la normativa que se expide por parte del Estado, responda de manera oportuna y significativa a la garantía de los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas.

Sin embargo, es claro que las dinámicas que se han materializado en vigencia de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas), ha dado cuenta que respecto de las personas que ostentan una doble condición de víctima y victimario han resultado excluidas de la oferta institucional que se ha creado para el restablecimiento del derecho de las víctimas.

En materia de violencia sexual, delito que es considerado de lesa humanidad e incluso crimen de guerra, se ha evidenciado que ha sido la jurisprudencia, a través de tribunales tanto nacionales como internacionales quienes han sido los abanderados, en la definición de criterios e interpretaciones que permitan que en aplicación tanto de Convenciones Internacionales y norma nacional, se logre garantizar que el Estado reconozca, repare, y sancione todas las conductas asociadas a este tipo de violencia, que tal y como se indicó de manera previa, su destinatario principal son los sujetos de especial protección (Mujer).

Ahora bien, para el caso Colombiano, se ha presentado una dicotomía de orden legal, en donde la Ley 1448 de 2011, ha establecido unos presupuestos legales, que permiten advertir una vulneración al derecho a la igualdad, por cuanto el artículo 3 en su párrafo primero, advierte una restricción clara para quienes en el marco de dicha norma ostenta la condición de víctima, y responde al hecho que quienes participen en las hostilidades como miembros de un grupo organizado al margen de la Ley, no se consideran como víctimas, limitando el acceso a la oferta institucional prevista en la norma citada.

En ese sentido, fue la Sentencia SU – 599 de 2019 a través de la cual la H. Corte Constitucional ha previsto la posibilidad de que las mujeres, pese a que fueron miembros de grupos organizados al margen de la Ley fuesen reconocidas como víctimas de violencia sexual en el marco de la Ley 1448 de 2011; pues después de un análisis de la situación propia y particular de este tipo de víctimas se llegó a la conclusión que un excombatiente en calidad de desmovilizado, pese a que cuente con una ruta de reincorporación a la vida civil, dicha oferta institucional no atiende y resarce de igual manera los vejámenes sufridos en el marco del conflicto armado, pues la Ley 1448 de 2011 cuenta con un espectro de aplicación más amplio que pese a que no se contemple de manera expresa una reparación administrativa en términos monetarios para la víctima, garantizar los derechos tales como a salud y educación, resulta un escenario importante para minimizar el impacto de la victimización.

En ese sentido, al advertirse una distinción legal, en la que de manera expresa se limita el reconocimiento de la calidad de víctima a quienes participaron de las hostilidades, y que solo a través de decisiones judiciales de orden constitucional se están evidenciando que los presupuestos previstos en la norma han cambiado, advierte una vulneración del derecho a la igualdad, en tanto que independientemente de la condición o calidad que ostente la persona en el momento de la ocurrencia del hecho victimizante, en este caso de violencia sexual, debe ser reconocido como víctima, pues de conformidad al marco normativo internacional las diferentes acciones relacionadas con este tipo de violencia están proscritas dentro del escenario de conflicto armado (internacional – no internacional)

## 5. CONCLUSIONES

A través de la historia se ha demostrado que las mujeres se convirtieron en uno de los botines de guerra predilecto de los diferentes actores armados en conflicto, no obstante, lo anterior, los estados inmersos en conflictos armados no internacionales han buscado como factor disuasorio el fortalecer sus leyes para proteger y brindar mayores garantías a las mujeres. Colombia no ha sido ajena en la instrumentalización de la mujer como factor desequilibrante en el conflicto armado no internacional, donde los diferentes actores buscan mostrar su poder a través de acciones militares indiscriminadamente, sin importar la obligación legal sobre las mujeres niños niñas y adolescentes, por ser personas de especial protección.

En el contexto del conflicto no internacional en Colombia, la gran mayoría de mujeres que hicieron parte de grupos organizados al margen de la ley, no lo hicieron de manera voluntaria, ni propiciaron o incitaron la violación de sus derechos y en especial los que desencadenaron hechos de violencia sexual, no obstante, las mujeres víctimas de violencia sexual en la mayoría de los casos son revictimizadas tanto por el Estado como por la sociedad y en especial cuando el perpetrador del abuso, ejerce un poder dominante dentro del entorno donde convive la víctima generando un estado indefensión que no les permite denunciar al victimario, sin embargo aunque dichas mujeres hayan sido víctimas de violencia sexual el ser excombatientes en la actualidad las aleja de posibles apoyos que brinda el Estado, elementos que les permita de alguna manera un retorno a su círculo familiar, en condiciones más dignas.

El Estado colombiano con el fin de generar herramientas jurídicas y administrativas que permitan garantizar la protección efectiva y reparación integral de aquellas personas que fueron víctimas en el marco del conflicto armado no internacional expidió la ley 1448 de 2011 no obstante lo anterior, en su construcción omitió diferentes situaciones fácticas en relación con algunos miembros de los grupos armados, como es el caso de las mujeres víctimas de delitos sexuales, quienes pasaron de ser victimarias a víctimas, como resultado de los abusos perpetrados por sus mismos compañeros de armas, quienes las convirtieron no solo en sus parejas, sino un objeto sexual sin su consentimiento.



Las diferentes situaciones fácticas no contempladas dentro de las disposiciones establecidas en la ley 1448 del 2011 impide y restringe su aplicación al momento del reconocimiento de la calidad de víctima de una persona que a su vez fue victimario ya que quienes sean declarados como victimarios no son incluidos dentro del universo de víctimas del conflicto no internacional en Colombia, lo anterior con ocasión a la definición y delimitación el universo de víctimas amparadas por la normativa en mención generando de esta manera una dicotomía legal, en ese sentido es la Corte Constitucional a través de diferentes pronunciamientos y con observancia de los diversos instrumentos jurídicos en materia de Derecho Internacional quien ha garantizado el principio de igualdad contemplado en la Constitución política dando lugar a la aplicación de las disposiciones establecidas en la ley 1448 del 2011 ya que propiamente en términos de reparación se debe tener una visión integral donde esta categoría de víctima ostente las mismas garantías sustanciales y procesales.

## REFERENCIAS

- Amador Baquiro, J. C. (2010). El intersticio de la víctima-victimario: un análisis de los procesos de subjetivación de cuatro desvinculados de grupos armados en Colombia. *Universitas humanística*, (69), 163-184. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/791/79118943009.pdf>
- Aguirre Aguirre, J. E. (2019). Victimario: la víctima desconocida del conflicto armado colombiano. Análisis de su reparación en torno al principio de igualdad. *Revista Derecho Del Estado*, (43), 291-320. <https://doi.org/10.18601/01229893.n43.1>
- Bello, M., Ortegón, J., Quishpe, R., & Sepúlveda, E. (2013). Debates en torno a las víctimas del conflicto armado interno dentro del actual proceso de negociación de finalización del conflicto. *Documentos de políticas públicas del Centro de Pensamiento Seguimiento a los Diálogos de Paz*, 1, 1-36. Recuperado de [https://extension.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensapaz/policy\\_papers/documentos\\_de\\_politicas\\_publicas\\_1.pdf](https://extension.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensapaz/policy_papers/documentos_de_politicas_publicas_1.pdf)
- Bernal Castro, C. A., Moya Vargas, M. F., Carvajal Martínez, J., & Tirado Acero, M. (2018). *Derecho internacional humanitario en el conflicto armado colombiano*. Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/23065>
- Bohórquez Suárez, A. M. (2018). Actualidad de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto en Colombia: marco normativo nacional e internacional. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/16066>
- Cáceres Mendoza E. (2013). Justicia transicional y derecho a la reparación integral aproximación al caso colombiano. *Novum Jus*, 7(2), 55-87. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2013.7.2.2>
- Camelo H. A. (2011). Transformación de las dinámicas de confrontación en los conflictos armados. *Novum Jus*, 5(1), 55-78. Recuperado de <https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/685>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). La guerra inscrita en el cuerpo. Bogotá: CNMH. Recuperado de

- [http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo\\_accesible.pdf](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo_accesible.pdf)
- Celis Parra, J. A. (2016). Sobre la posibilidad de construir la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano como un delito de lesa humanidad. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/3055>
- Chacón, N (2015). *Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos*. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/eficacia-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos.pdf>
- Congreso de la República de Colombia. (2011, junio, 10). Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.096. Recuperado de [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1448\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html)
- Defensoría del Pueblo. (2014). *Informe defensorial. Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes*. Recuperado de <https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialreclutamiento.pdf>
- Delgado Barón, M. (2015). Las víctimas del conflicto armado colombiano en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: apropiación y resignificación de una categoría jurídica. *Perfiles latinoamericanos*, 23(46), 121-145. Recuperado de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018876532015000200005&script=sci\\_artext&tlng=pt](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018876532015000200005&script=sci_artext&tlng=pt)
- Fajardo Arturo, L. A., & Valoyes Valoyes, R. Y. (2015). *Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las FARC*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta. [https://www.usergioarboleda.edu.co/wpcontent/uploads/2015/04/violencia\\_sexual\\_libro\\_completo.pdf](https://www.usergioarboleda.edu.co/wpcontent/uploads/2015/04/violencia_sexual_libro_completo.pdf)
- Fernández Carter, C. (2018). Los crímenes de violencia sexual cometidos al interior de un grupo armado: el caso de los niños soldados en *The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda*. *Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal*, 6, 81-109. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/anidip/a.7158>

- Fiscó, S. (2005). Atroces realidades: la violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado colombiano. *Papel político*, (17), 119-159. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/777/77720407004.pdf>
- Galvis, M C. (2009). Situación en Colombia de la violencia sexual contra las mujeres. Bogotá D.C: Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/45588/1/9789589782163.pdf>.
- Guglielmucci, A. (2017). El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, (59), 83-97. <https://journals.openedition.org/revestudsoc/608>
- Martínez Montoya, R., Bello Ramírez, A., Michelle del Pino, A., Bermúdez Pérez, H. N., & Serrano Murcia, A. M. (2017). *La guerra inscrita en el cuerpo: informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado*. Recuperado de <http://centrodememoriahistorica.gov.co/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo/>
- Mejía Duque, C. (2007) *Violencia sexual, conflicto armado y justicia en Colombia*. Violencia contra las mujeres/Violencia de género. Recuperado de <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/54830/violenciasexual.pdf?sequence=1>
- Moncayo Albornoz, A. L. (2009). Violencia sexual en el conflicto armado: barreras para acceder a la justicia. Mecanismos judiciales y administrativos de protección de sujetos vulnerados. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Recuperado de [https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1948/1/MAAspa2009Violencia\\_sexual\\_en\\_el\\_conflicto\\_armado\\_barreras\\_para\\_acceder\\_a\\_la\\_justicia](https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1948/1/MAAspa2009Violencia_sexual_en_el_conflicto_armado_barreras_para_acceder_a_la_justicia)
- Sánchez Mendoza, V., Lara Gutiérrez, J. M., Rodríguez, A. C., Santamaría, L. S. & Carranza, J. L. (2017). El conflicto armado en Colombia: breve recuento histórico. *Colección Logos Vestigium*, 3 (13-16), Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/19095>
- OMS. 2010. Violencia sexual. Definición, Recuperado de <http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/mujer/ip3.html>

- Palou-Loverdos J. (2018). Memoria y justicia transicional en los acuerdos de paz de Colombia. *Novum Jus*, 12(2), 113-127. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2018.12.2.6>
- Trejos, L. F. R (2013). Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado. *Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública*, 11(18), 55-75. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/960/96028142003.pdf>
- Valcárcel, J. M. (2007). Concepto de conflicto armado interno y seguridad jurídica. *Prolegómenos*, 10(19), 107-121. <https://doi.org/10.18359/prole.2548>
- Villellas, M. & Otros (2017). Violencia sexual en conflictos armados. PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, 137, 57 - 70. Recuperado de [https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista\\_papeles/137/Violencia\\_sexual\\_conflictos\\_armados\\_P.Urrutia\\_et\\_al.pdf](https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/137/Violencia_sexual_conflictos_armados_P.Urrutia_et_al.pdf)
- Wilches, I. (2010). Lo que hemos aprendido sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. *Revista de estudios sociales*, (36), 86-94. <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res36.2010.08>

## **Jurisprudencia**

- Corte Constitucional, República de Colombia. (2002, julio 30). Sentencia C-578 /2002. M J. Cepeda Espinosa (M.P). Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-578-02.htm>
- Corte Constitucional, República de Colombia. (2008, abril 14). Sentencia C 253A/2012. M J. Cepeda Espinosa (M.P). Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/AUTOS%202008/91.%20Auto%20del%2014-04-2008.%20Auto%20092.%20Protecci%C3%B3n%20mujeres%20v%C3%ADctimas%20del%20desplazamiento.pdf>
- Corte Constitucional, República de Colombia. (2012, marzo 29). Sentencia C 253A/2012. G E. Mendoza Martelo (M.P). Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-253A-12.htm>

Corte Constitucional, República de Colombia. (2017, enero 18). Sentencia C 006/2017. M V. Calle Correa (M.P). Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-006-17.htm>

Corte Constitucional, República de Colombia. (2018, julio 24). Sentencia T 299/2018. A. Linares Cantillo (M.P). Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-299-18.htm>

Corte Constitucional, República de Colombia. (2018, agosto 15). Sentencia C 080/2018. A J. Lizarazo Ocampo (M.P). Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-080-18.htm>

Corte Constitucional, República de Colombia. (2019, diciembre 11). Sentencia SU 599/2019. C. Pardo Schlesinger (M.P). Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2019/SU599-19.htm>

### **Normatividad Internacional**

Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW (1979). Recuperado de <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm>

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belém do Pará” (1995). Recuperado de <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993). Recuperado de <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>

Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado (1974). Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293>

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Recuperado de <http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

Resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU (2000). Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf>

## **Jurisprudencia Internacional**

Corte IDH (2006). *Caso Masacre de pueblo bello V/S Colombia*. Sentencia de 31 de enero. Recuperado de [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_140\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf)

Corte IDH (2009). *Caso González y otras V/S México*. Sentencia de 16 de noviembre. Recuperado de [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_205\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf)

Corte IDH (2011). *Caso Rosendo Candú y otras V/S México*. Sentencia de 15 de mayo. Recuperado de [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_225\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_225_esp.pdf)

Corte IDH (2013). *Caso J. V/S. Perú*. Sentencia de 27 de noviembre. Recuperado de [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_275\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf)

Corte IDH (2018). *Caso Mujeres torturadas sexualmente V/S México*. Sentencia del 28 de noviembre. Recuperado de [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_371\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf)

International Criminal Tribunal for the Yugoslavia (ICTY). Prosecutor vs Tadic. Case N° IT-94-1-T. Legal findings, Evidentiary Matters, Sentencing Judgement on 10 December 1998. Paragraph 715. Recuperado de <http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-ts70507JT2-e.pdf>

International Criminal Tribunal for the Yugoslavia. (ICTY). Prosecutor vs Furundzija. Case N° IT-95-17/1-T. Background and circumstances. The law. The events at the Bungalow and the holiday cottage in Nadioci. Sentencing Judgement on 10 december 1998. Paragraph 127. Recuperado de <http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf>

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Communiqué de presse. Prosecutor vs Kunarac, Vukovi and Kova. Case N° IT-96-23-1- T. Judgement of Trial Chamber II Sentencing Judgement on 22 February 2001. Paragraph 2. Recuperado de [http://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/010222\\_Kunarac\\_Kovac\\_Vuko vic\\_summary\\_en.pdf](http://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/010222_Kunarac_Kovac_Vuko vic_summary_en.pdf)